

ABOGADOS & CONSULTORES

CORRESPONSALES DE
WILKINSON BARKER KNAUER LLP
Washington, D.C.

Boletín Bimestral

Reporte 002

Enero 2002

Edificio Teatro Las Palmas, Piso 5,
Avenida Las Palmas, Urbanización Los Caobos,
Caracas 1050, Venezuela.

Teléfono 58.212. 794 0674

Telefax 58.212. 793.2792

Información sobre Venezuela

AVALANCHA LEGISLATIVA

El 13 de noviembre de 2000 se dictó la llamada Ley Habilitante, mediante la cual la Asamblea Nacional facultó al Presidente de la República, por espacio de un año, para dictar Decretos con Fuerza de Ley en los ámbitos financiero, económico, social, infraestructura, transporte, servicios, seguridad ciudadana, ciencia, tecnología y sector público. En uso de tal facultad, el Ejecutivo dictó una gran cantidad de leyes (53 en total, 12 de las cuales fueron luego "reimpresas por error material del ente emisor"), cuyo contenido acrecentaron los ya frecuentes conflictos entre los sectores público y privado, llegando a su punto más crítico con el paro nacional del día 10 de Diciembre de 2001 y con la manifestación multitudinaria que el pasado 23 de enero, según los analistas, reunió a más de 150.000 opositores del gobierno del Presidente Chávez. Muchas de esas leyes tienen un impacto importante para la industria de las telecomunicaciones y de los servicios públicos. Ahora los pulsos sobre el destino de la cuestionada normativa tendrán lugar en dos escenarios distintos: el Tribunal Supremo de Justicia, el cual revisa actualmente la constitucionalidad de algunas de estas leyes a solicitud de grupos de oposición, y la Asamblea Nacional que, como titular de la función legislativa, puede proceder a revisar las normas que han

suscitado polémica.

Al margen del desenlace, que todos ignoramos, cabe reflexionar sobre dos aspectos: El nuevo orden jurídico y económico que plantean las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional, caracterizado por una marcada ingerencia dirigista del Estado y, por otro lado, un cierto afán por hacer *tabula rasa* del pasado y cambiar las reglas, incluso cuando ello no parece justificarse. Esta misma tendencia se observó en la producción legislativa de la Asamblea Nacional, también abundante en el último trimestre del año 2001.

A continuación resumimos muy brevemente el contenido de algunas de las leyes dictadas por el Ejecutivo Nacional bajo el amparo de la Ley Habilitante, así como por la Asamblea Nacional. La selección obedece a la especial relevancia de las leyes comentadas para los sectores de las telecomunicaciones y otros servicios basados en infraestructuras de red.

• **Leyes dictadas por el Ejecutivo Nacional**

Decreto con Fuerza de Ley N° 1.204 de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (28/2/2001): Reconoce valor jurídico a las firmas electrónicas, mensajes de datos y a toda información inteligible en formato electrónico, elaborada por cualquier persona. Asimismo, regula los Certificados Electrónicos y a los Proveedores de Servicios de Certificación. Confiere a los mensajes de datos la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos.

Decreto N° 1.290 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (26/9/2001): Impone a las empresas con ingresos brutos anuales superiores a 100.000 Unidades Tributarias (aprox. US \$ 1.730.000), la inquietante obligación de invertir en formación, investigación y desarrollo en materia de ciencia y tecnología, un porcentaje de sus utilidades antes de impuesto, determinado por el Presidente de

CONTENIDO DE ESTA EDICIÓN

1 Información sobre Venezuela

2 Información Regional

Para información adicional sobre los tópicos presentados, por favor contactar a Carlos Seade en cseade@abogaconsult.com

la República, que puede alcanzar el 20%.

Decreto N° 1.436 con Fuerza de Ley General de Puertos (23/11/2001): Establece el régimen de puertos y su infraestructura, fijando las competencias respectivas de los Poderes Nacional y Estadal, con miras a modernizar el sistema portuario. Fija el sistema de concesiones, habilitaciones y autorizaciones para la operación de puertos e indica que las sociedades mercantiles que administren puertos deberán crear una reserva de capital no inferior al 30 % de la utilidad del ejercicio respectivo para destinarla a gastos de inversión y mejoramiento de la infraestructura portuaria.

Decreto N° 1.446 con Fuerza de Ley de Aviación Civil (28/9/2001): Regula las actividades de transporte aéreo de pasajeros, equipaje, carga y correo, aeronaves civiles para fines científicos, de exhibición, propaganda, trabajos industriales, agrícolas, sanitarios, deportivos, de instrucción y turismo, incluyendo lo relativo a las obras y funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria. También establece el régimen de concesiones y habilitaciones.

Decreto N° 1.445 con Fuerza de Ley del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional (30/10/2001): Regula la Planificación, construcción y explotación del sistema ferroviario nacional, declarando a éstas dos últimas actividades de utilidad pública e interés social, en cuya realización podrá participar la empresa privada.

Decreto N° 1.507 con Fuerza de Ley de Armonización y Coordinación de Competencias de los Poderes Públicos Nacional y Municipal para la Prestación de los Servicios de Distribución de Gas con fines domésticos y de electricidad (7/11/2001): Su propósito es identificar y delimitar las competencias respectivas de los Municipios y del Poder Nacional, en cuanto a los servicios domésticos de gas y de electricidad.

Decreto N° 1.535 con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre (26/11/2001): Regula el tránsito y el transporte terrestre, incluyendo la construcción y administración de vías de comunicación y servicios conexos. Conductores, peatones, pasajeros y operadores de servicios relacionados con el transporte terrestre son sujetos de la ley. Crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y ordena llevar un registro de vehículos y conductores.

Decreto N° 1.528 con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación (13/11/2001): Fortalece las potestades rectoras del Estado a través de la función de planificación, al tiempo que reconoce el derecho de los distintos sectores sociales a estar debidamente informados, elaborar propuestas, identificar prioridades y a recomendar formas de participación que incidan en dicha tarea estatal. Sienta las bases y lineamientos para la construcción, viabilidad, perfeccionamiento y organización de la planificación en los diferentes niveles territoriales de gobierno (Nacional, Estadal y Municipal).

Decreto N° 1.510 con Fuerza de Ley Orgánica de

Hidrocarburos (13/11/2001): Regula las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, productos refinados, así como las obras de infraestructura relacionadas con las mismas. Incrementa las regalías que las empresas del sector deben pagar al Estado. Los hidrocarburos gaseosos no se rigen por esta ley.

• **Leyes dictadas por la Asamblea Nacional**

Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (31/12/2001): El 31 de diciembre de 2001 fue finalmente publicada la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (que reforma la anterior Ley del Servicio Eléctrico), la cual se esperaba para antes del 21 de septiembre del mismo año. Este retraso de más de tres meses mantuvo a las empresas del sector en una suerte de "limbo jurídico" en cuanto a sus obligaciones legales. La reforma que introduce la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico tiene principalmente por objeto prorrogar los plazos inicialmente fijados para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la creación del Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico y la separación jurídica de actividades de generación, transmisión y distribución, ante el irremediable retraso ocurrido en la implementación del nuevo modelo regulatorio.

Ley Orgánica de la Prestación de Servicios de Agua Potable y de Saneamiento (31/12/2001): Tras una larga espera, caracterizada por la insuficiencia de los dispersos y fragmentarios textos que regulaban la materia, esta ley reúne, completa y sistematiza el régimen jurídico del servicio de suministro de agua potable y de saneamiento. Resalta que a diferencia del servicio público eléctrico, la titularidad de la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento se atribuye a los Municipios. Esto significa que serán estas entidades territoriales a las que corresponderá decidir si prestarán estos servicios directamente o a través de terceros (lo que hace posible el otorgamiento de concesiones municipales a empresas privadas). Por lo pronto, como quiera que actualmente la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento es realizada en su mayoría por órganos del Ejecutivo Nacional, la ley plantea una transición de 5 años, durante la cual deberá efectuarse la transferencia de los servicios a los Municipios o Distritos Metropolitanos.

Ley Orgánica de la Administración Pública (17/10/2001): Establece los principios y reglas de la actividad administrativa, así como los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La ley sintetiza de una manera completa y con una sistemática bien construida numerosos principios jurídicos desarrollados a lo largo de décadas por la jurisprudencia del Máximo Tribunal y de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo. Pero también trae novedades. Entre ellas, resalta la obligación que se impone a toda autoridad administrativa que se proponga dictar una regulación normativa de carácter

general, de realizar una consulta pública previa a la aprobación del texto, a fin de que cualquier interesado pueda exponer su opinión al respecto. La inobservancia de esta formalidad acarrea la nulidad absoluta de las normas aprobadas sin consulta. Se trata sin duda de un gran instrumento legal, que dota a los particulares de valiosos derechos. Ahora sólo queda esperar que el sector Gobierno lo aplique con seriedad.

Código Orgánico Tributario (17/10/2001): La reforma del Código Orgánico Tributario (C.O.T.) extiende la responsabilidad solidaria de los directores y gerentes hasta el pago de multas y accesorios. Es decir, los directores y gerentes son ahora solidariamente responsables con el contribuyente por los tributos y también por las multas y accesorios derivados de los bienes que administren, reciban o dispongan. Esta responsabilidad se limita al valor de dichos bienes. Por otra parte, resalta que el nuevo Código admite la fijación de domicilio electrónico, entendiéndose como tal un mecanismo tecnológico seguro que sirva de buzón de envío de actos administrativos. En materia de ilícitos tributarios, el nuevo C.O.T. los clasifica en ilícitos formales, ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas, ilícitos materiales e ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad, refiriéndose principalmente estos últimos al delito de defraudación tributaria, la cual es penada con prisión de 6 meses a 7 años.

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (28/12/2001): La reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta se refiere a cuatro aspectos específicos: La base imponible, dividendos, precios de transferencia y ajuste por inflación. Cabe cuestionar la constitucionalidad y la legalidad del artículo 199 de esta nueva Ley, el cual establece que la vigencia de la misma será a partir de su publicación en la Gaceta Oficial (es decir, a partir del 28 de diciembre de 2001) y que se aplicará a los ejercicios que se inicien durante su vigencia (es decir, a partir del ejercicio que comienza el 1° de enero de 2002). Ello pareciera estar en franca contradicción con los artículos 317 de la Constitución y 8 del C.O.T., los cuales establecen que las leyes tributarias deben fijar un lapso para su entrada en vigencia, es decir, que las leyes tributarias no pueden entrar en vigencia el mismo día de su publicación. Adicionalmente, dichos artículos de la Constitución y del C.O.T. establecen que si las leyes tributarias no establecen su lapso de entrada en vigencia, el mismo será de 60 días continuos a partir de su publicación en Gaceta Oficial. Todo ello de conformidad con los principios de certeza y comodidad tributaria. De declararse inconstitucional el artículo 199 de la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, deberá entenderse que la misma entrará en vigencia a los 60 días de su publicación en Gaceta Oficial, es decir, a partir del 27 de febrero de 2002. Por lo tanto, tratándose de un tributo que se determina por períodos, la nueva Ley sólo sería aplicable a los ejercicios que se inicien des-

pués del 27 de febrero del 2002, quedando excluidos de su ámbito de aplicación los ejercicios fiscales que se iniciaron el 1 de enero de 2002.

Ley Especial contra los Delitos Informáticos (30/10/2001): Tipifica delitos cometidos contra o mediante el uso de sistemas o componentes que utilicen tecnologías de la información, tales como el acceso indebido, sabotaje y daño a sistemas, espionaje informático, manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, violación de la privacidad de las comunicaciones, difusión o exhibición de material pornográfico, apropiación indebida de propiedad intelectual, etc.

SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

• Consultas Públicas:

En cumplimiento de lo establecido por la nueva Ley Orgánica de Administración Pública, en diciembre de 2001 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) realizó audiencias públicas para la discusión de los proyectos de reglamento sobre Servicio Universal y sobre Tributos especiales de Telecomunicaciones. Dichos eventos contaron con la amplia y abierta participación de diversos representantes del sector. El proyecto de **Reglamento de Servicio Universal** tiene por objeto regular la asignación, subsidio y control de obligaciones de servicio público que pueden ser asumidas por los operadores de telecomunicaciones. Por su parte, el proyecto de **Reglamento sobre Tributos especiales de Telecomunicaciones** desarrolla los deberes de los contribuyentes, especifica mecanismos concretos de control fiscal, define los modelos de autoliquidación y de cálculo de la tasa aplicable por el uso del espectro radioeléctrico y establece el monto de las tasas por trámites administrativos.

• Reglamento de Radiodifusión Sonora y TV Abierta Comunitaria de Servicio Público:

Dictado mediante Decreto N° 1521, publicado el 8 de enero de 2002 en Gaceta Oficial N° 37.359. Entre otras disposiciones, exonera del pago de tributos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LO-TEL) a los operadores de tales servicios.

• Transformación de las Concesiones o Títulos:

Mediante la Resolución N° 93, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.342 del 10 de diciembre 2001, CONATEL dio a conocer el cronograma establecido para que los operadores con títulos o concesiones anteriores a la entrada en vigencia de la LOTEL (12 de junio de 2000), soliciten la transformación de los mismos y adapten su régimen al nuevo marco regulatorio.

• Alarma ante la inminente aprobación de la llamada Ley de Contenidos:

Tras los sucesos acaecidos el pasado 8 de enero a las puertas de la sede principal del diario "El Nacional", en donde un grupo de manifestantes protestaron enérgicamente contra los medios de comunicación, la alarma

expresada por algunos sectores de la sociedad se ha visto acrecentada ante la inminente aprobación de la llamada "Ley de Contenidos", que se teme podría censurar arbitrariamente el contenido de las comunicaciones. Sin embargo, el Director General de CONATEL, Jesse Chacón, aseguró que el proyecto de Ley de Contenidos en que trabaja su Despacho no atenta contra la libertad de expresión, y que los sectores interesados podrán emitir su opinión al respecto durante el proceso de consulta que se iniciará el próximo mes de febrero.

SECTOR ELÉCTRICO

• *Crisis energética en puertas*

Existe gran preocupación en los diferentes sectores del país por la posible crisis en el sector eléctrico, como consecuencia de la situación hidrológica de la represa del Guri (que alcanza niveles mínimos históricos) y de la indisponibilidad del parque de generación térmica para satisfacer la demanda, cuya tendencia creciente se mantiene. Las previsiones meteorológicas para este año no parecen muy alentadoras, por lo que de seguir usándose al ritmo actual la energía almacenada en el embalse del Guri, la hidrología podría alcanzar niveles que obligarían la parada de unidades de dicha central, produciéndose racionamientos de gran magnitud en todo el país. Actualmente el Gobierno ha emprendido una campaña informativa a nivel nacional, para incentivar el uso racional de la electricidad: "para que no se apague, apágala". La solución a corto y mediano plazo, coinciden los expertos, está en la incorporación de plantas generadoras nuevas y eficientes al sistema.

PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL AÑO 2002

• *Precio de referencia del petróleo*

El presupuesto de la nación para el año 2002 tomó como referencia un precio por barril de petróleo de US\$ 18.50, lo que a primera vista parecería razonable en vista de la banda OPEP (US\$ 22 – USD 28). Sin embargo, desde comienzos de año, el precio del crudo ya se sitúa por debajo de las expectativas del Gobierno. De mantenerse esta situación, el déficit fiscal será pronto insostenible. Lo anterior evidencia, una vez más, la urgente necesidad que tiene Venezuela de crear sólidas fuentes de ingreso alternas a la industria petrolera.

• *Déficit presupuestario*

El Gobierno ha anunciado la aplicación de un nuevo impuesto al débito bancario, el cual gravará con un 0.75% a la mayoría de las transacciones que se efectúan a través del sistema financiero. Asimismo, se ha anunciado la eliminación de algunas exenciones de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y la aplicación de una alícuota adicional del 10% al consumo suntuario (impuesto al lujo). Estas medidas se deben principalmente al déficit presupuestario ocasionado por la caí-

da de los precios del petróleo por debajo de las expectativas oficiales (US\$ 18.50 por barril). Ello a pesar de los cuantiosos y extraordinarios ingresos petroleros que percibió la República en el año 2001.

Información Regional

BRASIL

El ente regulador del servicio eléctrico de Brasil, ANEEL, iniciará un proceso de licitación en julio para otorgar las concesiones que permitirán construir y operar por 35 años, 11 centrales hidroeléctricas con capacidad total de 2.200 MW y una inversión aproximada de (US\$1,37bn). Esto se suma a los 11 proyectos hidroeléctricos licitados satisfactoriamente en noviembre de 2001. De esta manera, Brasil continúa en sus esfuerzos por recuperarse de la crisis energética más aguda de su historia, ocasionada básicamente por dos factores: creciente insuficiencia de lluvias durante los últimos años y el bajo nivel de inversión para atender la creciente demanda de energía eléctrica.

COLOMBIA

Si bien el sistema de prepago del servicio telefónico, especialmente móvil celular y de larga distancia, es algo común, la implementación de este sistema en otro tipo de servicios públicos domiciliarios como la electricidad y el agua no sólo resulta novedosa sino que ofrece nuevas alternativas de pago para los usuarios y una oportunidad de nuevos negocios para los prestadores. Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) están encaminando sus acciones para permitir a sus clientes el pago anticipado de tales servicios.

PARAGUAY

Luis González Macchi, Presidente paraguayo, ordenó al Ente Regulador de las telecomunicaciones, CONATEL, así como a la Secretaría Nacional de la Reforma, la elaboración de normas para impulsar la liberalización de las telecomunicaciones.

URUGUAY

El Gobierno decidió postergar la subasta del espectro 2.5G y 3G, inicialmente prevista para el 28 de enero de 2002, hasta el 6 de mayo de este año. La crisis económica en la Argentina y la baja concurrencia de interesados, entre otras razones, motivaron el retraso.

CUBA

Ignacio González Planas, titular del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), anunció que una de las prioridades de su Despacho para este año será la instalación de una red nacional de fibra óptica, dada la insuficiente capacidad de la red de cable coaxial existente, la cual sufrió además considerables daños tras el paso por la Isla en noviembre del devastador huracán Michelle.

ABOGADOS & CONSULTORES

CORRESPONSALES DE
WILKINSON BARKER KNAUER LLP
Washington, D.C.

Bimonthly Newsletter

Issue 002

January 2002

Edificio Teatro Las Palmas, Piso 5,
Avenida Las Palmas, Urbanización Los Caobos,
Caracas 1050, Venezuela.

Telephone: 58.212. 794.0674

Telecopier: 58.212. 793.2792

Venezuelan Legal Insight

LEGISLATIVE AVALANCHE

Through the so-called Enabling Law, which came into force on September 13, 2000, the National Assembly authorized the Venezuelan President for a one-year period to issue Law-Force Decrees (equivalent to laws) on several fields such as financial, economic, social, infrastructure, transportation, services, public security, science, technology and public sector. As a result, the Executive enacted a considerable number of laws, (a total of 53, 12 of which were later reprinted "due to printing error by the issuer"), whose form and content sharpened the already frequent conflicts between the public and the private sector. These conflicts reached their peak on December 10, 2001, when a general strike, led by Fedecámaras (federation of commercial chambers) and backed up by the Venezuelan Federation of Labor Unions, took place. Additionally, on January 23, approximately 150,000 people publicly demonstrated in Caracas against the government of President Chávez. Many of these laws have a significant impact on the telecommunications industry and public services. Now, the fate of the criticized laws depends on two institutions: The Supreme Tribunal of Justice, which is currently revising the constitutionality of some of these laws as requested by opposition groups, and the National Assembly that may proceed to review these laws as part of its legislative function.

INSIDE THIS ISSUE

- 1 Venezuelan Legal Insight
- 2 Regional Insight

For any follow up on these newsletter topics, please feel free to contact Carlos Seade at:

cseade@abogaconsult.com

Whatever the outcome, two factors should be taken into account: First, the new legal and economic order laid down in the new laws is characterized by stronger State intervention. Second, a certain penchant for changing everything from the past by modifying all existing laws, even if it cannot be justified. The same tendency was observed in the abundant legislation produced by the National Assembly during the last quarter of year 2001.

Below, the content of some laws enacted by the Executive Branch under the Enabling Law and some others passed by the National Assembly are summarized. This selection is due to their special relevance for the telecommunications sector as well as for other services based on network infrastructures.

- **Laws decreed by the National Executive**

Law-Decree N° 1.204 on Data Messages and Electronic Signatures (2/28/2001): It grants legal value to electronic signatures, data messages and to any intelligible information in electronic format. It also regulates Certification Service Providers and Electronic Certificates. According to this law, data messages have the same evidence value as written documents.

Organic Law-Decree N° 1.290 on Science, Technology and Innovation (9/26/2001): It forces companies with an annual gross income of more than 100,000 taxable units (nearly USD 1,730,000) to invest an annual amount of up to 20% of their before-tax annual profits in training and research and development in the fields of science and technology.

Law-Decree N° 1.436: General Law on Ports (11/23/2001): It lays down the regulation of ports and their infrastructure, and fixes the respective national and regional competences with the aim of modernizing the functioning of ports. It sets the concession and authorization rules for port operations, and also

indicates that commercial companies managing ports must create a capital reserve of no less than 30% of their annual profits in order to make investments and improvements related to port infrastructure.

Law-Decree N° 1.446: Civil Aviation Law (9/28/2001): It regulates activities related to air transportation, luggage, freight and mail, civil aircrafts for scientific, advertising, industrial, agricultural, sanitary, sports, instruction and tourism purposes. It also deals with issues regarding airport infrastructure and the concession and authorization regime.

Law-Decree N° 1.445 on the National Railroad Transportation System (10/30/2001): It regulates the planning, construction and exploitation of the national railroad system, declaring the last two of these activities to be of public and social interest, which means that private companies may participate. It also contains the rules for rights of way and expropriation.

Law-Decree N° 1.507 on the Harmonization and Coordination of Competences of National and Municipal Public Powers For the Domestic Supply of Natural Gas and Electricity (11/7/2001): Its purpose is to identify and to delimit municipal and national competences regarding the domestic supply of gas and electricity, and thus to clarify the role of municipalities in this field, which will help to solve numerous problems arising from different interpretations of the Venezuelan Constitution and the Organic Law on Municipal Powers.

Law-Decree N° 1.535 on Traffic and Transportation by Road (11/26/2001): It regulates traffic and ground transportation, including construction, road administration and related services. Drivers, pedestrians, passengers and operators of services related to ground transportation are subject to this law. It creates the National Institute of Traffic and Ground Transportation and demands a special registration for vehicles and drivers.

Law-Decree N° 1.528: Organic Planning Law (11/13/2001): It strengthens the directing powers of the State through the planning function. However, it recognizes the right of different social sectors to be informed, to work out proposals, to identify priorities and to suggest participation methods in planning issues. It sets the basis and guidelines for the construction, viability, improvement and organization of the planning function at different governmental territorial levels (National, Regional and Municipal).

Law-Decree N° 1.510: Hydrocarbon Organic Law (11/13/2001): It regulates the exploration, exploitation, refining, industrialization, transport, storage, commercialization and conservation of hydrocarbons and refined products and the infrastructure required to carry out these activities. It also increases the royalties that companies performing the aforementioned activities must pay to the State. Gaseous

hydrocarbons are excluded from this law.

- ***Laws passed by the National Assembly***

Organic Law on Electric Service (12/31/2001): This law, which was expected to be published before September 21, 2001, was finally passed on December 31, 2001, reforming the previous one. This delay of over three months kept the companies related to the electric sector in an uncertain legal situation with respect to their obligations. The reform introduced by this law has the primary object of prorogating the initially fixed deadlines for the creation of an Electric Energy National Commission, an Electric System Management National Center and the separation of generation, transmission, and distribution activities.

Organic Law on Drinkable Water Supply and Sanitation (12/31/2001): After a long waiting period, characterized by the inadequacy of unclear and fragmentary laws and regulations, the new law gathers in a very systematic and complete way all activities related to the supply of drinkable water and sanitation. Contrary to the public service of electricity, water supply and sanitation services are the responsibility of the municipalities, and these territorial entities have to decide whether to provide services directly or through third parties (which opens the possibility of granting concessions to private companies). Therefore, and considering that these services are granted by units of the Executive Power, this law fixes a five-year transition period, during which the transfer of services to municipalities or Metropolitan Districts must take place.

Organic Law on Public Administration (10/17/2001): It determines the principles and rules of public authorities as well as citizens' rights when dealing with them. This law systematically covers numerous administrative law principles developed through several decades by the Supreme Court (known today as Supreme Tribunal of Justice) and the First Court in Contentious and Administrative Matters. This law also has its novelties. One of them is the duty of any public authority which wants to dictate a regulation, to conduct a public consultation prior to its approval, and thus to allow all participants to express their opinions or observations. If this formality is disregarded, the regulation will be null and void. This is undoubtedly a significant legal instrument which formally recognizes important rights of the citizens.

Organic Tax Code (10/17/2001): The reform to the Organic Tax Code extends the tax liability of company directors and managing staff to the payment of fines and other penalties, making them jointly liable with the taxpayer (the company) for the payment of taxes, fines and other penalties, derived from assets managed by them. This liability is limited to the value of the assets they manage. On the other hand, it is important to mention that the new Code provides the possibility of

fixing an electronic domicile, which consists in a safe technological device which may serve as a mailbox for receiving administrative orders from tax authorities. Regarding tax infractions, the new Code classifies them as formal infractions, infractions related to excise taxes, payment infractions and tax crimes, especially tax fraud, sanctioned with imprisonment of up to 7 years.

Partial Reform Law of the Income Tax Law (12/28/2001): This reform refers to four specific aspects: taxable basis, dividends, transfer prices and inflation adjustment. It is worth questioning the constitutionality and legality of article 199 of this new law, which provides that it will come into force on the same date of its publication in the Official Gazette (December 28, 2001) and that it will be applied to the fiscal periods that start after the law has come into force (including the fiscal year that started on January 1, 2002). This provision seems to be in opened contradiction with article 317 of the Constitution and with article 8 of the Organic Tax Code; according to these articles, tax laws must fix an idle period before the new law comes into force. In other words, tax laws cannot come into force on the same day of their publication. In addition, the aforementioned articles provide that if new tax laws do not fix a term for coming into force, this term shall be of 60 calendar days from their publication in the Official Gazette, in accordance with the tax law principles of certainty and convenience. If article 199 is declared unconstitutional, this law will come into force 60 days after its official publication, that is, on February 27, 2002. Therefore, and since income taxes are based on taxable periods, this new law should only be applicable to periods beginning on or after February 27, 2002. Consequently, the new law would not apply to the taxable period that started on January 1, 2002 but to the period starting on January 1, 2003.

Special Law Against Information Technology Crimes (30/10/2001): It defines crimes committed against or through the employment of information technology systems or components. These crimes include illegal access, sabotage and damage of systems, informatic espionage, fraudulent manipulation of intelligent cards, violation of the privacy in telecommunications, diffusion or exhibition of pornographic material, misappropriation of intellectual property rights and so on.

TELECOMMUNICATIONS SECTOR

- **Public Consultations:** Complying with the provisions laid down in the Organic Law of Public Administration, in December 2001 the telecommunications regulatory body, CONATEL, conducted public consultations for discussing draft regulations on Universal Service and Special Telecommunications Taxes. These events were marked by the extensive and opened participation of different representatives of the telecom sector.

The purpose of the *Universal Service Draft Regulation* is to regulate the duties of assignment, subsidization and control of public services that may be assumed by telecommunications operators. On the other hand, the *Draft Regulation on Special Telecommunication Taxes* addresses taxpayers' legal obligations, specifies concrete mechanisms for fiscal control, defines the determination and calculation models of the tax on the use of the electromagnetic spectrum and establishes the tax amount to be charged for administrative services.

- **Regulation on Radio Broadcasting and Open Communal TV Public Service:** This regulation was dictated through Decree N° 1521 which was published in the Official Gazette N° 37.359 on January 8, 2002. Among other provisions, it exempts the operators of these services from the tax obligations as laid down in the Organic Telecommunications Law .

- **Transformation of Licenses and Concessions** Through Resolution N° 93, published in the Official Gazette N° 37.342 on December 10, 2001, CONATEL made public the timetable that telecommunications operators with licenses or concessions obtained before June 12, 2000, must request their transformation and adaptation to the new regulatory regime of the Organic Telecommunications Law .

- **Alarm due to the imminent approval of the so-called Contents Law**

After the incidents occurred on January 8, 2002, in front of the head office of "El Nacional" (one of the major newspapers in the country) where a group of activists demonstrated against media organizations, the alarm expressed by some sectors of society has now increased due to the imminent approval of the so-called "Contents Law," which could arbitrarily censor the content of communications. However, Jesse Chacón, General Director of CONATEL, affirmed that the draft of the Contents Law prepared by the regulatory body only regulates transmissions of audiovisual content and that interested sectors may express their opinion about this draft during the public consultation process, which may be in February 2002.

ELECTRIC SECTOR

- **Risk of Energy Crisis**

Different sectors of the country are worried about a possible crisis in the energy sector as a result of the delicate situation of the reservoir called "el Guri" (which has reached unprecedented low levels) and the poor capacity of thermoelectric generation to satisfy growing demands. The meteorological forecasts for the current year do not seem very encouraging. Therefore, if the actual energy consumption continues, the low water levels of Guri might reach a point where some generation units of the plant will have to be stopped. This may lead to considerable cuts in energy supply

throughout the whole country. Now, the government has started a nationwide information campaign to promote the rational use of electricity. Experts agree that the short and medium-term solution would be the incorporation of new and efficient generation plants to the system.

NATIONAL BUDGET FOR THE YEAR 2002

- ***Oil Reference Price***

The national budget for the year 2002 took a referential oil price of USD 18.50 per barrel, which might seem reasonable at first sight, considering the OPEC band (USD 22 – USD 28). However, since the beginning of the current year, the oil prices have been lower than expected by the Government. If this situation continues, the budget deficit will soon be unbearable. This proves, once again, that Venezuela urgently needs to create reliable income alternatives to the oil industry.

- ***Budget Deficit***

The Government has announced the introduction of a new tax on banking debits, with a rate of 0.75%, applied to the majority of transactions performed through the financial system, as well as the elimination of some exemptions from the Value Added Tax Law and a 10% tax increase on luxury items. These measures are primarily due to the budget deficit caused by oil prices that turned out to be lower than expected (USD 18.50). These decisions were taken in spite of the substantial and extraordinary oil revenues during year 2001.

Regional Insight

BRAZIL

The Brazilian regulatory body of electricity service, ANEEL, will start a bidding process in July in order to grant concessions allowing the construction and operation of 11 hydroelectric plants with a total capacity of 2,200 MW for 35 years, representing an investment of nearly USD 1.37bn. These projects join the 11 hydroelectric projects successfully assigned in November 2001. In this manner, Brazil continues its

efforts to recover from the most severe energy crisis of its history, basically caused by two factors: Insufficient rain falls during the last few years and a lack of investments to meet growing energy demands.

COLOMBIA

Although the prepaid system for telephone services, in particular mobile and long distance, is rather common, the implementation of this system in other fields such as the domestic supply of electricity and water, is not only innovative, but also offers paying alternatives to consumers and new business opportunities for operators. The Medellín Public Companies are already taking action to allow their customers to prepay for such services.

PARAGUAY

The president of Paraguay, Luis González Macchi, gave instructions to the Telecommunications Regulatory Body and the National Secretary of Reform, to draw up regulations to promote the liberalization of telecommunications.

URUGUAY

The Government decided to postpone the bidding for the spectrum 2.5G and 3.0G, which was originally planned for January 28, 2002. It will be held on May 6, 2000. The Argentinean crisis and the low participation of interested companies were some of the reasons of the delay.

CUBA

Ignacio González Planas, head of the Department of Informatics and Communications, announced that one of the priorities for the current year was the installation of a fiber optic network at a national level, since the coaxial cable network, which was considerably damaged by hurricane Michelle hitting the island last November, was insufficient to cover internal communications.